

**SENTENCIA.**

**PROCEDIMIENTO: APLICACIÓN GENERAL**

**MATERIA: DESPIDO INJUSTIFICADO, INDEBIDO O IMPROCEDENTE, Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES**

**DEMANDANTE: JESSICA NATALIA ACUÑA JEREZ, ROXANA DEL PILAR GOMEZ, ERICKSON ENRIQUE ALBERTO SILVA CASTRO**

**DEMANDADO: PARIS ADMINISTRADORA LIMITADA**

**RIT O-64-2019 acumulada con las causa O-94-2019 y O-95-2019**

**RUC N° 19-4-0165757-9**

**Talca, a nueve de octubre de dos mil diecinueve.**

**VISTO.**

**Individualización completa de las partes litigantes.** Que son partes en este juicio laboral RUC 19-4-0165757-9; RIT N° O-64-2019 acumulada con las causa O-94-2019 y O-95-2019; del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, en procedimiento de aplicación general, como demandantes doña **Jessica Natalia Acuña Jerez**, cédula de identidad N° 15.773.193-9, vendedora, domiciliada en calle 1 Oriente N° 1676, Ciudad de Talca; doña **Roxana Del Pilar Gómez Erickson**, cédula de identidad N° 17.040.157-3, Vendedora, domiciliada en calle 1 Oriente N° 1676, Ciudad de Talca y don **Enrique Alberto Silva Castro**, cédula de identidad N° 14.344.478-3, vendedor, domiciliada en calle 1 Oriente N° 1676, Ciudad de Talca; asistidos en audiencia, a través de su abogado y apoderado don **Nicolás Andrés Salhus Mardones** y como demandado **Paris Administradora Limitada**, sociedad del giro retail, RUT 96.973.670-5, representada legalmente por don **Emilio Carstens Echeverría**, Gerente de Operaciones, ambos domiciliados para estos efectos en calle 1 Sur 1477, ciudad de Talca, asistido en audiencia por su abogada y apoderada doña **Ingrid Hernández Román**

**La demanda de doña Jessica Acuña Jerez, su pretensión, síntesis de sus argumentos de hechos y de Derecho.**

Pretensión de la demandante.

Pide se declare que su despido del 28 de noviembre de 2018 es injustificado, indebido o improcedente o lo que este tribunal estime conforme a derecho; que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio es de \$ 814.176 pesos o la que estime el tribunal y se condene a la demandada al pago de \$ 1.465.517 por concepto de incremento legal establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo; al pago de \$ 866.223 por concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 845.371 más la diferencia de cálculo de \$20.852 pesos, o lo que el tribunal estime conforme a derecho y al pago de la remuneración del mes de noviembre de 2018, por la suma de \$ 752.216 pesos o lo que este tribunal estime conforme a derecho.

Pretende que este tribunal declare que la demandada incumplió el artículo 177 del Código del Trabajo, no poniendo a disposición el finiquito y pago de



XSDTMXLPRH

indemnizaciones en tiempo y forma o lo que este tribunal estime conforme a derecho y que se apliquen las multas respectivas del artículo 506 del Código citado y todo lo anterior con reajustes e intereses y con costas para la demandada.

Pide, por último que este tribunal declare todo lo que estime conforme a Derecho.

Antecedentes en cuanto a la relación laboral.

Indica que trabajó para la demandada desde el 19 de noviembre de 2012 como vendedora integral en Tienda Paris Talca ubicada en calle Uno Sur 1477, percibiendo una remuneración variable, que tenía un promedio de los últimos 3 meses completos trabajados por la suma de \$ 814.176 pesos, laborando en una jornada de trabajo de 45 horas semanales.

Respecto al despido (la causal y los hechos en que se funda).

Expresa que fue despedida el 28 de noviembre de 2018, siendo notificada de ello mediante carta de la misma fecha que le comunica su despido en virtud de la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo.

Transcribe dicha misiva y en ella se expresa que la causal se funda en que la Empresa Paris Administradora Limitada, se ha visto afectada en el año 2018 en sus resultados operativos de toda ella, con una importante disminución en sus ventas respecto del mismo periodo (enero a octubre de 2017 versus 2018 ) con una disminución de un 132 % y en el resultado EBITDA con una disminución respecto al mismo periodo (enero - octubre 2018 versus 2017) de un 170,1%, no alcanzando las metas definidas para el periodo comercial, siendo esos los factores que influyeron en un importante e insostenible decrecimiento comercial.

Agrega la carta que dicho decrecimiento se agravó por el cambio de modalidad de compras de los clientes, los que prefieren materializar sus compras a través de las diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, disminuyendo la concurrencia física a las tiendas, todo lo cual incide en la importante baja de las mismas.

Indica que su carta de despido expresa que considerando fundamentalmente la viabilidad de la Empresa, la demandada decidió iniciar un proceso de reestructuración operacional que conlleva la racionalización y disminución de las dotaciones de personal y demás recursos propios de la venta directa al público, modificando los modelos de atención y servicios tradicionales que se entregan a los clientes, preservando la fuente laboral para el resto de los trabajadores mediante la estabilización de sus ventas y resultados comerciales. Reestructuración que obedece a la constate búsqueda de eficiencia en los procesos y operaciones que desarrolla, concluyendo la disminución de la dotación de trabajadores en el cargo de vendedor integral en la tienda en que se desempeña la demandante.

Respecto de las sumas ofertadas como pago de indemnizaciones legales y suscripción del finiquito respectivo.

Indica la demandante que la carta le ofrece el pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo de \$810.701; una indemnización por años de servicio por \$4.864.206, que se indica se pagará conjuntamente con la suscripción de su respectivo finiquito, una vez compensados, en los términos que dispone el artículo 1656 del Código Civil, los descuentos legales y convencionales que procedieren,



finiquito que, indica la carta, estará a su disposición en las dependencias de la empresa en el plazo de 10 días hábiles contados desde el despido.

La actora señala que dicho finiquito lo suscribe el 8 de enero de 2019, haciendo reserva de acciones para demandar múltiples temas y conceptos.

Agrega que la demandada infringió la normativa laboral no poniendo a disposición el finiquito y pago en el tiempo y forma que la ley y la jurisprudencia ha establecido, pues el finiquito suscrito es de fecha 8 de enero de 2019 y la fecha del documento confeccionado por la demandada es de 6 de diciembre de 2018, lo que es claro y contradictorio con lo que señala la carta de despido y jamás se le comunicó en que notaria o Inspección del trabajo debía concurrir a suscribir el finiquito, lo que le permite a la actora concluir que la ex empleadora no puso a disposición el finiquito y pago en los plazos legales, y debe ser sancionada con las multas pertinentes del caso.

Argumentos para sostener que la causal aplicada es injustificada, indebida e improcedente.

Expresa la demandante que los fundamentos de la demandada para el despido, no son graves, permanentes ni ajenos u objetivos, pues hace referencia a periodos de 2017 y 2018, lo cual da cuenta que los motivos no son permanentes; habla de resultados operativos pero no los explica, hace referencia a un EBITDA, lo que no se entiende y no se explica; se remite a porcentajes que no explica con números económicos, por lo que tampoco hay gravedad.

En cuanto al fundamento del cambio en la modalidad de compra, la referencia a diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, no señala cuales y cuanto son las compras y menos un análisis comparativo en periodos y valores y respecto de la disminución de concurrencia física de compradores, no señala de que periodo, cuantos, forma de medición, etc.

Observa que la causal aplicada no reúne en lo más mínimo los criterios legales y jurisprudenciales que permitan justificar el despido, quedando de manifiesto que se trata de una decisión gerencial de la empresa para cambiar el modelo de atención al cliente, buscando reducir costos y seguramente teniendo como consecuencia hacer ineficaz los instrumentos colectivos vigentes en la misma.

Argumentos de Derecho.

Indica que la motivación principal para desvincular a un trabajador por necesidades de la empresa debe necesariamente fundarse en políticas de racionalización o modernización que adopte la misma, bajas en la productividad o cambio en las condiciones del mercado o la economía, circunstancias que no existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido de la forma como lo ha entendido la ley y la jurisprudencia que cita.

Invoca el carácter proteccionista y de privilegio a la estabilidad en el empleo que tiene el Derecho del Trabajo, supeditando la extinción o terminación de los contratos a la existencia de alegarse y existir causales que permitan excepcionalmente amagar dicha estabilidad, razón por la cual debe necesariamente el despido ampararse en causales verdaderas y absolutamente excepcionales respecto del mantenimiento del contrato de trabajo, lo que no se cumple en su caso.



Expresa que la jurisprudencia que cita ha interpretado restrictivamente el sentido de las formalidades del despido establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, en el sentido de exigir no solo el envío de la carta, sino que la misma debe contener todos y cada uno de los antecedentes de hecho en que se funda el despido, de lo contrario se deja en indefensión al trabajador.

Reitera que su despido debe ser declarado injustificado, indebido o improcedente, en atención a que no cumple con exigencias de fondo pues debe necesariamente fundarse en motivos graves, permanentes y ajenos u objetivos, circunstancias que no existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido. En su caso solo se indican argumentos y decisiones gerenciales no ligadas a situaciones graves, permanentes y ajenas u objetivas, es más solo se señala el periodo 2018 y se compara con el periodo 2017, haciendo mención a la baja en concurrencia física a la tienda, y aumento modalidad de compras virtuales por el comercio electrónico, dejándola en completo estado de indefensión, razón por la cual y teniendo conocimiento de que la empresa no tiene bajas en la productividad que justifiquen el despido y que tampoco adolece de falta de presupuesto, se reservó el derecho a accionar para que este tribunal determine en definitiva que su despido es injustificado, indebido o improcedente.

Agrega que la carta no indica los valores económicos de pérdida de los periodos aludidos; no consigna la cantidad de aumento de ventas por comercio electrónico versus ventas físicas en local; no expresa la cantidad de personas que concurrió físicamente a la tienda en periodo 2017 versus 2018; tampoco indica factores de medición de la misma, lo que permite colegir que evidentemente se omitió describir los hechos reales en que se funda la causal de necesidades de la empresa, impidiendo a la demandante realizar una defensa efectiva al momento de discutir la procedencia de dicha causal.

Señala que la decisión de su despido no puede referirse a la estabilización de las ventas y resultados comerciales, cita argumentos de otra jurisprudencia e invoca el artículo N° 168 a) del Código del Trabajo que se refiere al aumento que debe realizarse en la indemnización por años de servicio.

Trae como argumentación lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo que se hizo efectivo en su caso, imputación que resulta ilegal, toda vez que su despido, es injustificado, de forma que en caso de declararse el despido como injustificado, indebido o improcedente, no puede servir válidamente para el descuento legal, toda vez que la causal del despido sería la mera voluntad del empleador y no la de necesidades de la empresa, conforme al criterio jurisprudencial que invoca y cita.

### **La demanda de doña Roxana del Pilar Gómez Erickson, su pretensión, síntesis de sus argumentos de hechos y de Derecho.**

#### Pretensión de la demandante.

Pide se declare que su despido del 17 de diciembre de 2018 es injustificado, indebido o improcedente o lo que este tribunal estime conforme a derecho; que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio es de \$ 811.910 o la que estime el tribunal y se condene a la demandada al pago de \$ 2.537.298 por concepto de incremento legal establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo; al pago de \$1.145.512 por



concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 1.145.512.

Pretende que este tribunal declare que la demandada incumplió el artículo 177 del Código del Trabajo, no poniendo a disposición el finiquito y pago de indemnizaciones en tiempo y forma o lo que este tribunal estime conforme a derecho y que se apliquen las multas respectivas del artículo 506 del Código citado y todo lo anterior con reajustes e intereses y con costas para la demandada.

Pide, por último que este tribunal declare todo lo que estime conforme a Derecho.

Antecedentes en cuanto a la relación laboral.

Indica que trabajó para la demandada desde el 19 de marzo de 2009 como vendedora integral en Tienda Paris Talca ubicada en calle Uno Sur 1477, percibiendo una remuneración variable, que tenía un promedio de los últimos 3 meses completos trabajados por la suma de \$811.910, laborando en una jornada de trabajo de 45 horas semanales.

Respecto al despido (la causal y los hechos en que se funda).

Expresa que fue despedida el 17 de diciembre de 2018, siendo notificada de ello mediante carta de la misma fecha que le comunica su despido en virtud de la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo.

Transcribe dicha misiva y en ella se expresa que la causal se funda en que la Empresa Paris Administradora Limitada, se ha visto afectada en el año 2018 en sus resultados operativos de toda ella, con una importante disminución en sus ventas respecto del mismo periodo (enero a octubre de 2017 versus 2018 ) con una disminución de un 132 % y en el resultado EBITDA con una disminución respecto al mismo periodo (enero - octubre 2018 versus 2017) de un 170,1%, no alcanzando las metas definidas para el periodo comercial, siendo esos los factores que influyeron en un importante e insostenible decrecimiento comercial.

Agrega la carta que dicho decrecimiento se agravó por el cambio de modalidad de compras de los clientes, los que prefieren materializar sus compras a través de las diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, disminuyendo la concurrencia física a las tiendas, todo lo cual incide en la importante baja de las mismas.

Indica que su carta de despido expresa que considerando fundamentalmente la viabilidad de la Empresa, la demandada decidió iniciar un proceso de reestructuración operacional que conlleva la racionalización y disminución de las dotaciones de personal y demás recursos propios de la venta directa al público, modificando los modelos de atención y servicios tradicionales que se entregan a los clientes, preservando la fuente laboral para el resto de los trabajadores mediante la estabilización de sus ventas y resultados comerciales. Reestructuración que obedece a la constatación de búsqueda de eficiencia en los procesos y operaciones que desarrolla, concluyendo la disminución de la dotación de trabajadores en el cargo de vendedor integral en la tienda en que se desempeña la demandante.

Respecto de las sumas ofertadas como pago de indemnizaciones legales y suscripción del finiquito respectivo.



Indica la demandante que la carta le ofrece el pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo de \$845.766; una indemnización por años de servicio por \$8.457.6606, que se indica se pagará conjuntamente con la suscripción de su respectivo finiquito, una vez compensados, en los términos que dispone el artículo 1656 del Código Civil, los descuentos legales y convencionales que procedieren, finiquito que, indica la carta, estará a su disposición en las dependencias de la empresa en el plazo de 10 días hábiles contados desde el despido.

La actora señala que dicho finiquito lo suscribe el 8 de enero de 2019, haciendo reserva de acciones para demandar múltiples temas y conceptos.

Agrega que la demandada infringió la normativa laboral no poniendo a disposición el finiquito y pago en el tiempo y forma que la ley y la jurisprudencia ha establecido, pues el finiquito suscrito es de fecha 8 de enero de 2019 y la fecha del documento confeccionado por la demandada es de 6 de diciembre de 2018, lo que es claro y contradictorio con lo que señala la carta de despido y jamás se le comunicó en que notaria o Inspección del trabajo debía concurrir a suscribir el finiquito, lo que le permite a la actora concluir que la ex empleadora no puso a disposición el finiquito y pago en los plazos legales, y debe ser sancionada con las multas pertinentes del caso.

Argumentos para sostener que la causal aplicada es injustificada, indebida e improcedente.

Expresa la demandante que los fundamentos de la demandada para el despido, no son graves, permanentes ni ajenos u objetivos, pues hace referencia a periodos de 2017 y 2018, lo cual da cuenta que los motivos no son permanentes; habla de resultados operativos pero no los explica, hace referencia a un EBITDA, lo que no se entiende y no se explica; se remite a porcentajes que no explica con números económicos, por lo que tampoco hay gravedad.

En cuanto al fundamento del cambio en la modalidad de compra, la referencia a diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, no señala cuales y cuanto son las compras y menos un análisis comparativo en periodos y valores y respecto de la disminución de concurrencia física de compradores, no señala de que periodo, cuantos, forma de medición, etc.

Observa que la causal aplicada no reúne en lo más mínimo los criterios legales y jurisprudenciales que permitan justificar el despido, quedando de manifiesto que se trata de una decisión gerencial de la empresa para cambiar el modelo de atención al cliente, buscando reducir costos y seguramente teniendo como consecuencia hacer ineficaz los instrumentos colectivos vigentes en la misma.

Argumentos de Derecho.

Indica que la motivación principal para desvincular a un trabajador por necesidades de la empresa debe necesariamente fundarse en políticas de racionalización o modernización que adopte la misma, bajas en la productividad o cambio en las condiciones del mercado o la economía, circunstancias que no existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido de la forma como lo ha entendido la ley y la jurisprudencia que cita.

Invoca el carácter proteccionista y de privilegio a la estabilidad en el empleo que tiene el Derecho del Trabajo, supeditando la extinción o terminación de los contratos a la existencia de alegarse y existir causales que permitan



excepcionalmente amagar dicha estabilidad, razón por la cual debe necesariamente el despido ampararse en causales verdaderas y absolutamente excepcionales respecto del mantenimiento del contrato de trabajo, lo que no se cumple en su caso.

Expresa que la jurisprudencia que cita ha interpretado restrictivamente el sentido de las formalidades del despido establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, en el sentido de exigir no solo el envío de la carta, sino que la misma debe contener todos y cada uno de los antecedentes de hecho en que se funda el despido, de lo contrario se deja en indefensión al trabajador.

Reitera que su despido debe ser declarado injustificado, indebido o improcedente, en atención a que no cumple con exigencias de fondo pues debe necesariamente fundarse en motivos graves, permanentes y ajenos u objetivos, circunstancias que no existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido. En su caso solo se indican argumentos y decisiones gerenciales no ligadas a situaciones graves, permanentes y ajenas u objetivas, es más solo se señala el periodo 2018 y se compara con el periodo 2017, haciendo mención a la baja en concurrencia física a la tienda, y aumento modalidad de compras virtuales por el comercio electrónico, dejándola en completo estado de indefensión, razón por la cual y teniendo conocimiento de que la empresa no tiene bajas en la productividad que justifiquen el despido y que tampoco adolece de falta de presupuesto, se reservó el derecho a accionar para que este tribunal determine en definitiva que su despido es injustificado, indebido o improcedente.

Agrega que la carta no indica los valores económicos de pérdida de los periodos aludidos; no consigna la cantidad de aumento de ventas por comercio electrónico versus ventas físicas en local; no expresa la cantidad de personas que concurrió físicamente a la tienda en periodo 2017 versus 2018; tampoco indica factores de medición de la misma, lo que permite colegir que evidentemente se omitió describir los hechos reales en que se funda la causal de necesidades de la empresa, impidiendo a la demandante realizar una defensa efectiva al momento de discutir la procedencia de dicha causal.

Señala que la decisión de su despido no puede referirse a la estabilización de las ventas y resultados comerciales, cita argumentos de otra jurisprudencia e invoca el artículo N° 168 a) del Código del Trabajo que se refiere al aumento que debe realizarse en la indemnización por años de servicio.

Trae como argumentación lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo que se hizo efectivo en su caso, imputación que resulta ilegal, toda vez que su despido, es injustificado, de forma que en caso de declararse el despido como injustificado, indebido o improcedente, no puede servir válidamente para el descuento legal, toda vez que la causal del despido sería la mera voluntad del empleador y no la de necesidades de la empresa, conforme al criterio jurisprudencial que invoca y cita.

### **La demanda de don Enrique Alberto Silva Castro, su pretensión, síntesis de sus argumentos de hechos y de Derecho.**

#### Pretensión de la demandante.

Pide se declare que su despido del 17 de diciembre de 2018 es injustificado, indebido o improcedente o lo que este tribunal estime conforme a



derecho; que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio es de \$ 772.973 o la que estime el tribunal y se condene a la demandada al pago de \$ 2.550.811 por concepto de incremento legal establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo; al pago de \$1.347.396 por concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 1.145.512 más la diferencia de cálculo conforme la base de cálculo de dicha indemnización por años de servicios de \$ 56.595.

Pretende que este tribunal declare que la demandada incumplió el artículo 177 del Código del Trabajo, no poniendo a disposición el finiquito y pago de indemnizaciones en tiempo y forma o lo que este tribunal estime conforme a derecho y que se apliquen las multas respectivas del artículo 506 del Código citado y todo lo anterior con reajustes e intereses y con costas para la demandada.

Pide, por último que este tribunal declare todo lo que estime conforme a Derecho.

Antecedentes en cuanto a la relación laboral.

Indica que trabajó para la demandada desde el 14 de septiembre de 2007 como vendedor integral en Tienda Paris Talca ubicada en calle Uno Sur 1477, percibiendo una remuneración variable, que tenía un promedio de los últimos 3 meses completos trabajados por la suma de \$772.973, laborando en una jornada de trabajo de 45 horas semanales.

Respecto al despido (la causal y los hechos en que se funda).

Expresa que fue despedido el 17 de diciembre de 2018, siendo notificado de ello mediante carta de la misma fecha que le comunica su despido en virtud de la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo.

Transcribe dicha misiva y en ella se expresa que la causal se funda en que la Empresa Paris Administradora Limitada, se ha visto afectada en el año 2018 en sus resultados operativos de toda ella, con una importante disminución en sus ventas respecto del mismo periodo (enero a octubre de 2017 versus 2018 ) con una disminución de un 132 % y en el resultado EBITDA con una disminución respecto al mismo periodo (enero - octubre 2018 versus 2017) de un 170,1%, no alcanzando las metas definidas para el periodo comercial, siendo esos los factores que influyeron en un importante e insostenible decrecimiento comercial.

Agrega la carta que dicho decrecimiento se agravó por el cambio de modalidad de compras de los clientes, los que prefieren materializar sus compras a través de las diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, disminuyendo la concurrencia física a las tiendas, todo lo cual incide en la importante baja de las mismas.

Indica que su carta de despido expresa que considerando fundamentalmente la viabilidad de la Empresa, la demandada decidió iniciar un proceso de reestructuración operacional que conlleva la racionalización y disminución de las dotaciones de personal y demás recursos propios de la venta directa al público, modificando los modelos de atención y servicios tradicionales que se entregan a los clientes, preservando la fuente laboral para el resto de los trabajadores mediante la estabilización de sus ventas y resultados comerciales. Reestructuración que obedece a la constatación de búsqueda de eficiencia en los procesos y operaciones que desarrolla, concluyendo la disminución de la dotación





de trabajadores en el cargo de vendedor integral en la tienda en que se desempeña la demandante.

Respecto de las sumas ofertadas como pago de indemnizaciones legales y suscripción del finiquito respectivo.

Indica la demandante que la carta le ofrece el pago de una indemnización sustitutiva del aviso previo de \$767.828; una indemnización por años de servicio por \$8.446.108, que se indica se pagará conjuntamente con la suscripción de su respectivo finiquito, una vez compensados, en los términos que dispone el artículo 1656 del Código Civil, los descuentos legales y convencionales que procedieren, finiquito que, indica la carta, estará a su disposición en las dependencias de la empresa en el plazo de 10 días hábiles contados desde el despido.

La actora señala que dicho finiquito lo suscribe el 8 de enero de 2019, haciendo reserva de acciones para demandar múltiples temas y conceptos.

Agrega que la demandada infringió la normativa laboral no poniendo a disposición el finiquito y pago en el tiempo y forma que la ley y la jurisprudencia ha establecido, pues el finiquito suscrito es de fecha 8 de enero de 2019 y la fecha del documento confeccionado por la demandada es de 6 de diciembre de 2018, lo que es claro y contradictorio con lo que señala la carta de despido y jamás se le comunicó en que notaria o Inspección del trabajo debía concurrir a suscribir el finiquito, lo que le permite a la actora concluir que la ex empleadora no puso a disposición el finiquito y pago en los plazos legales, y debe ser sancionada con las multas pertinentes del caso.

Argumentos para sostener que la causal aplicada es injustificada, indebida e impropia.

Expresa la demandante que los fundamentos de la demandada para el despido, no son graves, permanentes ni ajenos u objetivos, pues hace referencia a periodos de 2017 y 2018, lo cual da cuenta que los motivos no son permanentes; habla de resultados operativos pero no los explica, hace referencia a un EBITDA, lo que no se entiende y no se explica; se remite a porcentajes que no explica con números económicos, por lo que tampoco hay gravedad.

En cuanto al fundamento del cambio en la modalidad de compra, la referencia a diversas plataformas virtuales del comercio electrónico, no señala cuales y cuanto son las compras y menos un análisis comparativo en periodos y valores y respecto de la disminución de concurrencia física de compradores, no señala de que periodo, cuantos, forma de medición, etc.

Observa que la causal aplicada no reúne en lo más mínimo los criterios legales y jurisprudenciales que permitan justificar el despido, quedando de manifiesto que se trata de una decisión gerencial de la empresa para cambiar el modelo de atención al cliente, buscando reducir costos y seguramente teniendo como consecuencia hacer ineficaz los instrumentos colectivos vigentes en la misma.

Argumentos de Derecho.

Indica que la motivación principal para desvincular a un trabajador por necesidades de la empresa debe necesariamente fundarse en políticas de racionalización o modernización que adopte la misma, bajas en la productividad o cambio en las condiciones del mercado o la economía, circunstancias que no



existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido de la forma como lo ha entendido la ley y la jurisprudencia que cita.

Invoca el carácter proteccionista y de privilegio a la estabilidad en el empleo que tiene el Derecho del Trabajo, supeditando la extinción o terminación de los contratos a la existencia de alegarse y existir causales que permitan excepcionalmente amagar dicha estabilidad, razón por la cual debe necesariamente el despido ampararse en causales verdaderas y absolutamente excepcionales respecto del mantenimiento del contrato de trabajo, lo que no se cumple en su caso.

Expresa que la jurisprudencia que cita ha interpretado restrictivamente el sentido de las formalidades del despido establecidas en el artículo 162 del Código del Trabajo, en el sentido de exigir no solo el envío de la carta, sino que la misma debe contener todos y cada uno de los antecedentes de hecho en que se funda el despido, de lo contrario se deja en indefensión al trabajador.

Reitera que su despido debe ser declarado injustificado, indebido o improcedente, en atención a que no cumple con exigencias de fondo pues debe necesariamente fundarse en motivos graves, permanentes y ajenos u objetivos, circunstancias que no existen de hecho y que tampoco fueron invocadas al momento de su despido. En su caso solo se indican argumentos y decisiones gerenciales no ligadas a situaciones graves, permanentes y ajenas u objetivas, es más solo se señala el periodo 2018 y se compara con el periodo 2017, haciendo mención a la baja en concurrencia física a la tienda, y aumento modalidad de compras virtuales por el comercio electrónico, dejándola en completo estado de indefensión, razón por la cual y teniendo conocimiento de que la empresa no tiene bajas en la productividad que justifiquen el despido y que tampoco adolece de falta de presupuesto, se reservó el derecho a accionar para que este tribunal determine en definitiva que su despido es injustificado, indebido o improcedente.

Agrega que la carta no indica los valores económicos de pérdida de los periodos aludidos; no consigna la cantidad de aumento de ventas por comercio electrónico versus ventas físicas en local; no expresa la cantidad de personas que concurrió físicamente a la tienda en periodo 2017 versus 2018; tampoco indica factores de medición de la misma, lo que permite colegir que evidentemente se omitió describir los hechos reales en que se funda la causal de necesidades de la empresa, impidiendo a la demandante realizar una defensa efectiva al momento de discutir la procedencia de dicha causal.

Señala que la decisión de su despido no puede referirse a la estabilización de las ventas y resultados comerciales, cita argumentos de otra jurisprudencia e invoca el artículo N° 168 a) del Código del Trabajo que se refiere al aumento que debe realizarse en la indemnización por años de servicio.

Trae como argumentación lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, lo que se hizo efectivo en su caso, imputación que resulta ilegal, toda vez que su despido, es injustificado, de forma que en caso de declararse el despido como injustificado, indebido o improcedente, no puede servir válidamente para el descuento legal, toda vez que la causal del despido sería la mera voluntad del empleador y no la de necesidades de la empresa, conforme al criterio jurisprudencial que invoca y cita.



**La contestación a la demanda, sus excepciones y defensas, síntesis de los hechos y argumentos de Derecho en que se apoya.**

Opone excepción de pago.

En relación a la remuneración del mes de noviembre de 2018, opone la excepción de pago respecto a la pretensión de la demandante por el pago de su remuneración de noviembre de 2018, toda vez que esta fue total y completamente pagada en el mes de diciembre de 2018, mediante pago a la cuenta corriente personal de la actora, por lo tanto, se opone la excepción de pago por las sumas solicitadas, la que deberá ser acogida.

Se opone a la devolución de la suma descontada en el finiquito por aportes al fondo de seguro de cesantía de los actores. Argumentos de la demandada.

Invoca lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 de esta Ley para señalar que ella se encuentra facultada para descontar de la indemnización por años de servicio la parte correspondiente al 1,6% que se ha aportado a la cuenta individual del trabajador, y que en el caso de autos corresponde a la suma de \$845.371 respecto a la Srta. Acuña; \$1.145.512 respecto a la Srta. Gómez y \$1.290.801 respecto al Sr. Silva.

Respecto de los fundamentos de la demanda en este aspecto señala que ello es una interpretación unilateral de la contraria pues la sanción por la declaración de improcedencia del despido es la aplicación del recargo legal del 30% pero no inhabilita a la trabajadora para solicitar la devolución de las sumas descontadas.

Agrega que la aplicación de la referida norma no es perjudicial para el trabajador ya que si cumple con los requisitos del artículo 24 de la misma ley, el fondo solidario operará una vez agotados los recursos de su cuenta individual por cesantía, salvo que el trabajador haya recibido prestaciones con cargo ese fondo, más de dos veces en un período de 5 años, en cuyo caso sólo tendrá derecho a utilizar los fondos de su cuenta Individual de cesantía.

Señalan que la devolución del descuento no está dispuesto ni por el Código del Trabajo ni por la Ley 19.728 desde que si las necesidades de la empresa no resulta aplicable, no se explica cuál sería la causal, sin que el código citado señale qué otro efecto, además del incremento del artículo 168 a), tiene la declaración de indebido de un despido por necesidades de la empresa, de manera que aunque se declare indebido el despido por necesidades de la empresa, esta declaración no tiene como efecto mutar la causal invocada, por lo que de todas formas el empleador siempre mantiene la facultad de descontar el aporte del empleador al Seguro de Desempleo.

Agrega que el tenor del artículo 15 citado es claro en el sentido que, cuando la relación laboral termina por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo procede imputar al pago de la prestación el aporte que hizo el empleador a la cuenta individual por cesantía, texto que no hace distinción respecto de la calificación del despido y sólo alude a la causal, de forma que, si el legislador no distingue, para efectos del citado descuento, si el despido es o no es justificado, o, si el desahucio o las necesidades de la empresa se encuentran en la misma situación o no, sólo procede que el intérprete no haga ninguna distinción, conforme lo ha entendido la jurisprudencia que cita y transcribe parcialmente.



Argumenta que, dar lugar a la solicitud de los actores, implicaría una doble sanción al empleador la cual no está consagrada en la legislación laboral vigente, sino que se creó por la Excelentísima Corte Suprema, órgano jurisdiccional que carece de facultades legislativas por ende, el fallo en que funda la petición la contraria resulta ilegal e inconstitucional.

Reitera que de accederse a lo solicitado no habría causal de terminación del contrato y por ello el empleador tendría derecho a pedir la devolución de lo pagado por indemnización por años de servicios.

Indica que el inciso segundo del artículo 52 de la Ley 19.728 regula de modo expreso los efectos de la improcedencia de la causal de terminación del contrato, siendo su tenor claro, y no corresponde que se desatienda a pretexto de consultar su espíritu, cuestión que en los hechos están realizando las Ilustres Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema, en los fallos en los cuales se concluye la improcedencia de la imputación consagrada en el artículo 13 de la Ley, doctrina que avala un enriquecimiento ilegítimo y sin causa, incentiva el cuestionamiento del despido con el único objeto de obtener un monto adicional al incremento establecido, cuestión que no está acorde con los principios de equidad básicos de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto al supuesto despido injustificado.

Indica que efectivamente los actores fueron despedidos por la causal de necesidades de la empresa, fundada en el inicio de un proceso de reestructuración general, y del área dónde se desempeñaban, la que obedece a la búsqueda de eficiencias en los procesos y procedimientos de la Compañía que hizo indispensable efectuar cambios en la composición del personal, en términos de adaptarla a la actual realidad económica, lo que redundó en el despido de varios trabajadores de la empresa, ya que es un hecho público y notorio que las ventas del comercio han disminuido, el país se ha enfrentado a una fuerte desaceleración económica en los últimos meses, lo cual ha provocado una baja en las ventas, debiendo adoptar nuevos modelos de atención que implican prescindir de los servicios de muchos trabajadores, reestructurando además las distintas secciones y/o departamentos de la empresa.

Agrega que todas las tiendas Paris del país, están en plan de reducción de personal y de reestructuración dado por los cambios en la economía del país y el cambio de modelo de atención a los clientes, despidiendo a más de 400 personas.

Alude a un aumento de las compañías que prestan los mismos servicios, que hacía necesaria esta reestructuración interna a fin de diseñar políticas para obtener ventajas comparativas frente a la competencia, lo que los llevó a reducir costos, y en consecuencia, a una serie de despidos ejerciendo su derecho a organizar, dirigir y administrar la Empresa en los términos que la hagan más viable, competitiva y rentable, así como también para asegurar la fuente ingreso del personal vigente, más aun tomando en consideración la situación actual de nuestra economía, con una desaceleración evidente desde hace ya varios meses a esta fecha.

Expresa que, como consecuencia de lo anterior y, ante la necesidad de repuntar en los resultados de la sección, se decidió reestructurar la empresa,



siendo imposible reubicar al actor en otras áreas dado que las mismas están con dotación completa y en plan de reducción y reestructuración de personal.

Sostiene que no hay razones de carácter subjetivo, sino única y exclusivamente en la reorganización que llevó a cabo el empleador en virtud de su poder de dirección, organización y mando, que tiene su sustento en la libertad de emprendimiento consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República.

La causal no puede ser entendida exclusivamente desde lo jurídico.

Expresa que en el concepto de la causal deben considerarse otros saberes relacionados fuertemente a la organización y dinámica empresarial y así la racionalización son aquellas estrategias que se dirigen a organizar la empresa de tal modo que se obtengan los mejores resultados posibles con los menores costos o esfuerzos. Por modernización empresarial, debe entenderse la estrategia dirigida a la adopción de nuevos procesos de trabajos, también vinculados a reestructuración organizacional, y especialmente a la innovación y adopción de nueva tecnología en el proceso productivo.

Indica que ambos conceptos se conciben intrínsecamente vinculados y como parte integrante de una misma estrategia empresarial que persigue objetivos de reducción de costos y de mayor competencia, especialmente para adquirir mayor capacidad operativa en él; en otras palabras, políticas diseñadas para obtener ventajas comparativas frente a la competencia.

Afirma que hay jurisprudencia que se ha pronunciado expresamente sobre la racionalización como una de las hipótesis a que es aplicable la causal de necesidades de la empresa

Sostiene que la causal está motivada por situaciones derivadas de la economía, pudiendo configurarla también otras distintas y es la misma norma que remite a políticas propias de la reestructuración empresarial interna, o a procesos de modernización de procesos que no sólo atañen a la incorporación de tecnología, pudiendo considerarse otras como procesos de absorción empresarial motivados desde fuera de la empresa.

En cuanto a la expresión necesidades de la empresa.

Afirma que la causal no exige que las contingencias que la justifican afecten al conjunto de la empresa desde que aluden a unidades menores como son el establecimiento y el servicio. En cuanto a la "necesidad", es posible sostener que cuando algo se hace por necesidad, se alude a todo aquello respecto de lo cual es imposible de sustraerse, faltar o resistir de forma que no es posible resistirse al despido, cuando por ello la adaptación de la empresa a nuevas condiciones económicas más gravosas; o bien, cuando ello resulta imprescindible desde la perspectiva de un proceso de reestructuración empresarial y ello porque, en su sentido natural y obvio "necesidades" significa "todo aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir" y a su turno, la voz "sustraerse" se define como la acción de apartarse o separarse.

Acusa que las causales a las que alude la norma no son taxativas, pues utiliza la expresión "tales como", lo cual, evidentemente, hace notar que la intención del legislador no ha sido circunscribirlas únicamente a las hipótesis allí descritas.



Indica que la jurisprudencia laboral ha señalado que, no estableciendo la norma qué se entiende por "racionalización" debe estarse a la definición que se contiene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define racionalización: "la acción y efecto de racionalizar el trabajo" y que "racionalizar" importa "organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo".

Finalmente sostiene que una vez configurada la causal es el empleador en virtud de su potestad de mando, dirección y organización, quien decide qué trabajadores despedir, con la única limitación que se desempeñen en el área afectada por la necesidad de la empresa, como efectivamente ocurrió en autos, lo que no ni ilegal ni arbitrario pues es una decisión amparada por nuestro Ordenamiento Jurídico y que tiene su fundamento en la garantía fundamental del artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, esto es, la libertad de emprendimiento.

Respecto a las supuestas diferencias en las indemnizaciones legales.

Sostiene que, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, la remuneración del señor Silva era de \$767.828; \$810.701 la de la señora Acuña y de \$845.766 respecto de la actora señora Gómez, y no la señalada por los demandantes en su libelo, por lo tanto, controvierte la remuneración establecida toda vez las remuneraciones deben ser calculadas conforme al mérito del proceso, especialmente lo contemplado en el artículo 172 del Código del Trabajo y la Jurisprudencia en cuanto a la determinación de las 3 últimas remuneraciones percibidas por el trabajador si ésta fuese variable, considerando todas las prestaciones que hayan sido entregadas con habitualidad, como es el caso de autos, por lo que las diferencias alegadas por los demandantes son total y completamente improcedentes.

Improcedencia de las prestaciones demandadas.

Expresa que deben ser rechazadas íntegramente, en atención a que no procede el despido sea declarado injustificado. Es improcedente el recargo legal del 30%, toda vez que el despido no ha sido improcedente y se debió a una real reestructuración de la empresa, así como la devolución de suma descontada por AFC, por lo señalado anteriormente y por ser contrario a la ley.

Es improcedente el pago de remuneración del mes de noviembre de 2018 de la señora Acuña, por encontrarse pagada completamente y son improcedentes las supuestas diferencias en las remuneraciones de los demandantes para efectos indemnizatorios, de conformidad a lo establecido en el artículo 172 del Código del Trabajo y lo señalado anteriormente.

**El traslado de la excepción de pago en la audiencia preparatoria y el allanamiento de la demandante señora Acuña.**

Que no obstante la naturaleza de la excepción opuesta por la demandada (excepción de fondo o perentoria), el tribunal confirió traslado de aquella opuesta por la demandada respecto de la pretensión de pago de remuneraciones de la demandante señor Acuña.

La actora contestó el traslado y se allanó a ella quedando su resolución para la sentencia definitiva.



**El llamado a conciliación y su resultado.** Que el tribunal efectuó el llamado a conciliación en la etapa procesal respectiva, la que no se produjo.

## **Y CONSIDERANDO.**

**PRIMERO. La determinación de la controversia fáctica** Que conforme a los escritos principales del proceso, se estableció por el tribunal los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:

- 1) Estipulaciones de los contratos de trabajo que unía a los trabajadores con la empresa demandada.
- 2) Contenido de la carta de despido.
- 3) Efectividad de concurrir los hechos que dan cuenta la carta de despido. Hechos que lo acrediten.
- 4) Contenido del Finiquito. Hechos que lo acrediten
- 5) Las tres últimas remuneraciones percibidas por los trabajadores previos a la desvinculación. Hechos que lo acrediten.
- 6) Monto descontado por concepto de pago AFC Chile, respecto de cada uno de los trabajadores

## **SEGUNDO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandada.**

Que sólo para los efectos de dejar establecido en esta sentencia de la prueba rendida, lo que no obsta a su necesaria valoración individual y su análisis en conjunto para establecer el alcance de los estándares que requiere la sana crítica, cabe señalar que la parte demandada rindió en juicio la siguiente prueba:

### Prueba instrumental:

Mediante su lectura extractada y pertinente, se incorpora los siguientes documentos:

- 1.- copia de contrato de trabajo de fecha 1 de enero de 2010, entre la demandada y don Enrique Alberto Silva Castro, con dos anexos, de fecha 20 diciembre 2010 y 21 abril 2011.
- 2.- copia de carta de despido de 17 de diciembre de 2018 remitido a don Enrique Alberto Silva Castro.
- 3.- comprobante de carta de aviso de terminación de contrato de trabajo dirigido por la demandada a la Dirección del Trabajo, de 17 de diciembre de 2018.
- 4.- finiquito de contrato de trabajo de 20 de diciembre de 2018 suscrito ante notario público por don Enrique Alberto Silva Castro, con comprobante de entrega vale a la vista, firmado por el trabajador.
- 5.- copia de tres certificados de saldo aporte empleador al seguro de cesantía para imputar a indemnización, de fecha 20 de diciembre de 2018, referido a don Enrique Alberto Silva Castro, por las suma de \$402.253, \$181.233 y \$707.315, respectivamente.
- 6.- copia de proyecto de finiquito de trabajo del actor don Enrique Alberto Silva Castro, de fecha 20 de diciembre de 2018, con constancia de recepción en notaria de don Ignacio Vidal Domínguez.



- 7.- Copia de liquidación de remuneraciones del trabajador Enrique Alberto Silva Castro, correspondiente a los meses de mayo a diciembre 2018, ambos meses inclusive.
- 8.- copia de contrato de trabajo de fecha 19 de noviembre de 2012, entre la demandada y doña Jessica Natalia Acuña Jerez, con cuatro anexos, dos de 19 de noviembre 2012, de 1 mayo 2013 y de 1 diciembre 2017.
- 9.- copia de carta de despido de 28 de noviembre de 2018 dirigida a doña Jessica Acuña Jerez.
- 10.- copia de comprobante de carta de despido dirigida a la Dirección del Trabajo de 28 de noviembre de 2018.
- 11.- Finiquito de contrato de trabajo de fecha 6 de diciembre de 2018, firmado ante notario público por trabajadora Jessica Natalia Acuña Jerez, con comprobante de entrega vale a la vista, firmado por trabajadora.
- 12.- Tres certificados de saldo aporte empleador al seguro de cesantía para imputar a indemnización, de fecha 5 de diciembre de 2018, referido a aportes efectuados por la demandada a la cuenta individual de la actora doña Jessica Natalia Acuña Jerez, por las suma de \$215.255, \$173.457 y \$456.659 respectivamente.
- 13.- copia de proyecto de finiquito de trabajo de la trabajadora doña Jessica Natalia Acuña Jerez, con timbre de fecha 6 de diciembre de 2018 como recepción de notario don Ignacio Vidal Domínguez.
- 14.- Copia de liquidación de remuneraciones de la trabajadora Jessica Natalia Acuña Jerez, correspondiente a los meses de mayo a noviembre 2018, ambos meses inclusive.
- 15.- copia de contrato de trabajo de fecha 1 de junio de 2012, entre la demandada y doña Roxana Del Pilar Gómez Erickson, con tres anexos, de fecha 1 de junio 2012 y dos anexos de 1 diciembre 2014.
- 16.- Carta de despido, de fecha 17 de diciembre de 2018 dirigida a la trabajadora Roxana Del Pilar Gómez Erickson.
- 17.- Comprobante de copia de carta de despido dirigido por la demandada a la Dirección del Trabajo, de fecha 17 de diciembre de 2018, referido a la desvinculación de la trabajadora Roxana Del Pilar Gómez Erickson.
- 18.- copia de finiquito firmado ante notario público el 8 de enero de 2019 por la demandante doña Roxana Del Pilar Gómez Erickson, con comprobante de entrega vale a la vista, firmado por trabajadora.
- 19.- Tres certificados de saldo aporte empleador al seguro de cesantía para imputar a indemnización, de fecha 20 de diciembre de 2018, referido a aportes efectuados por la demandada a la cuenta individual de la actora Roxana Del Pilar Gómez Erickson por las suma de \$535.492, \$168.451 y \$441.569 respectivamente.
- 20.- Copia de liquidación de remuneraciones de la demandante doña Roxana Del Pilar Gómez Erickson de los meses de junio 2018 a diciembre 2018, ambos meses inclusive.
- 21.- Copia de proyecto de finiquito de trabajo de la trabajadora doña Roxana Del Pilar Gómez Erickson con timbre de 20 de diciembre de 2018 como recepción de notaria de don Ignacio Vidal Domínguez.





22.- Copia de nómina de trabajadores desvinculados diciembre 2018 a enero 2019 sección zapatos-zapatillas tienda Paris Talca, emanad de la demandada, jefe de personal de la tienda Paris Talca.

23.- Copia de carta de despido de doña Karen Michael Ulloa González, de 30 de enero de 2019, y su comprobante de remisión de copia a Inspección del Trabajo de Talca de la misma fecha.

24.-Copia de carta de despido de doña Paola Francisca Poblete Farías, de 29 de noviembre de 2018, y comprobante de remisión de aviso a Inspección Del Trabajo de Talca de la misma fecha.

25.- Copia de Balance Paris Cierre octubre 2018 y diciembre de 2018, correspondientes a tiendas Paris a nivel nacional. Emanan de la demandada.

Ella dice que es información pública y que es la que presenta a la Superintendencia.

26.- Copia de documento emanado de la demandada que contiene una nómina de 325 personas despedidas a nivel nacional todos por necesidades de la empresa.

Absolución de posiciones:

Que fueron citados bajo apercibimiento los tres demandantes, legalmente citados a través de su abogado en la audiencia preparatoria, compareciendo a estrados solo doña Roxana Del Pilar Gómez Erickson, la que respondió las preguntas efectuadas por su contraparte.

Los otros actores no comparecen sin causa justificada y la demandada solicita aplicar el apercibimiento decretado en la audiencia de preparación.

Prueba de testigos:

Previo cumplimiento de las formalidades legales comparecen en estrados y prestan declaración como testigos, las siguientes personas:

1.- don **Roberto Alfredo Parada Bravo**, cédula nacional de identidad N° 14.573.774-5, quien señala ser Jefe de control interno de tercer piso de parís de Talca, en ese cargo hace 16 años.

**TERCERO. Breve enunciado de la prueba rendida por la parte demandante.**

Que sólo para los efectos de dejar establecido en esta sentencia de la prueba rendida, lo que no obsta a su necesaria valoración individual y su análisis en conjunto para establecer el alcance de los estándares que requiere la sana crítica, cabe señalar que los demandantes rinden en juicio la siguiente prueba:

Prueba instrumental:

Mediante su lectura extractada y pertinente, se incorpora los siguientes documentos:

1.- copias de las cartas de aviso de despido de los tres demandantes todas de 17 de diciembre de 2018.

2.- copia de tres finiquitos correspondientes de los demandantes.

3.- liquidaciones de remuneraciones desde julio a noviembre 2018 de doña Jessica Acuña.

4.- liquidaciones de remuneraciones desde julio a diciembre 2018 de don Enrique Silva Castro.



5.- liquidaciones de remuneraciones desde julio a noviembre 2018 de doña Roxana Gómez Erikson.

Exhibición instrumental:

Que como parte de su prueba instrumental, se ordenó bajo apercibimiento por el tribunal, previa solicitud de la contraparte, que se exhibieran los siguientes documentos:

- 1.- libro de remuneraciones del periodo diciembre de 2018 a marzo de 2019, de tienda París Talca. Se exhiben y se cumple y se incorpora los meses de diciembre de 2018.
- 2.- Estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019 de la demandada. Se exhiben los estados financieros diciembre 2016, 2017 y 2018. Se cumple la exhiben y se incorporan como parte de su prueba. El tribunal decreta que los estados financieros queden en custodia física del tribunal y no se incorporen a la carpeta de tramitación judicial

Prueba de testigos:

Previo cumplimiento de las formalidades legales comparecen en estrados y prestan declaración como testigos, las siguientes personas:

1.- doña Carla Andrea Patricia Guarda Parra, cédula nacional de identidad N°13.723.194-8, quien en estrados señaló que solo sabe que despidieron a los actores por necesidades de la empresa por restructuración. Indica que leyó la cata de Jessica y Enrique pues ellos se le exhiben.

2.- doña Denise Angélica Roa Castro, cédula nacional de identidad N°14.594.126-1, la que comparece a estrados y señala que es ex compañera de trabajo de los demandantes.

**CUARTO. La carga material de la prueba en los juicios por despido y la imposibilidad de agregar hechos distintos de los indicados en la carta respectiva.** Que la norma del artículo 454 N° 1 inciso 2 del Código del trabajo nos entrega dos reglas relevantes en los juicio por despido: una, que es carga de la parte demandada acreditar la veracidad de los hechos de la carta de despido y la segunda, cual es que no se pueden invocar por el empleador, para justificar el despido, hechos distintos de los indicados en la carta de terminación del contrato.

Lo anterior determina que en este juicio la parte demandada solo puede rendir prueba respecto de la existencia de los hechos que indica la comunicación enviada a los demandantes, de manera que, no obstante la amplitud con la que el tribunal recibe la causa a prueba, la regla prohibitiva del artículo 454 N° 1 inciso es una limitante insalvable al tiempo del análisis de aquella.

Que la misma regla señalada en el motivo anterior determina que es carga probatoria de la parte demandada empleadora en los juicios por despido la acreditación de la veracidad de los hechos en que se fundamenta la causal aplicada.

Solo una vez que la prueba rendida alcanza los estándares que no contraviene la sana crítica para establecer dicha verdad procesal, resulta



procedente analizar si los hechos se encuadran en la hipótesis normativa de la causal de termino de contrato aplicada.

**QUINTO.- La afectación negativa en los resultados operativos de la demandada. Disminución de ventas e índice “Ebitda”. Análisis e insuficiencia de prueba (puntos de prueba 2 y 3).** Que la demandada entiende que se configura la causal por cuanto la empresa Paris Administradora Limitada se ha visto afectada en sus resultados operativos en el año 2018, de toda la empresa, pues ha disminuido sus ventas comparando el periodo enero octubre 2017 y enero octubre 2018, disminuyendo dichas ventas en un 132% y ha disminuido el índice llamado “Ebitda” comparativamente en el mismo periodo, no alcanzando las metas definidas para el periodo comercial.

Siendo de carga de la demandada, la única prueba que ella rinde son dos documentos y la declaración de un único testigo, señor Parada Bravo, documentos que no reúnen condiciones de objetividad suficiente y, la declaración del testigo, no es suficiente como para dotar de objetividad dichos instrumentos y por su cargo y lo que expresa en estrados, el testigo no tiene mayor conocimiento ni da mayores razones para dar por acreditada esta circunstancia.

En efecto, en primer lugar, los documentos signados con el N° 25 de la prueba instrumental de la demandada fueron ofrecidos e incorporados como Balance de cierre octubre 2018 y Balance Paris cierre diciembre 2018, pero al ser exhibidos al testigo de la misma demandada, fueron identificados por ella como “índices Ebitda”, lo que resulta contradictorio en sí mismo pues no hay claridad si es un balance (y de que naturaleza ) o es un documento que da cuenta de la medición de un índice que es de carácter interno de la empresa (como queda claro en la declaración del mismo testigo).

En segundo lugar, se trata de dos instrumentos que emanan de la misma parte que los presenta en favor de su teoría del caso, pues aparecen suscritos por un gerente de la tienda de Talca, lo que le resta esenciales condiciones de objetividad para establecer un hecho que, al ser fundante de una causal de despido, debe tener ciertas características de certeza y objetividad, más allá de lo que expresa la misma demandada. En el desarrollo de la audiencia, la demandada expresó que se trata de información que es pública, cuestión que no fue acreditada de ninguna forma y no cae dentro de lo que pudiese establecerse como un hecho público y notorio que releve de prueba. Por ello es que la información que surge de los documentos no es suficiente para tener por acreditado esos hechos ni aun cuando dicha información sea reafirmada por el testigo de la demandada, puesto que, como se dirá, el testigo conoce esas cifras pero no tiene acceso a mayor información de como se obtienen esas cifras que emana de la misma demandada

En tercer lugar, ambos instrumentos solo refieren una comparación entre dos meses de los años 2017 y 2018 y no el periodo a que se refiere la carta de despido de manera que, además, expresan información de carácter parcial, cuestión que aclara el mismo testigo señor Parada cuando se le exhiben los documentos y expresa en estrados que ese documento es el Ebitda y señala que el documento que se le exhibe da cuenta de las ganancias en octubre de 2018,



siendo la misma información el otro documento que se refiere al mes de diciembre de 2018.

En cuarto lugar, la declaración del testigo señor Parada no es suficiente en si misma para acreditar el hecho invocado ni reúne condiciones para completar la falta de objetividad del documento que emana de la misma parte demandada. En efecto, el testigo manifiesta que su cargo es jefe de control solo de la tienda Paris Talca en donde laboraban los actores y el grado de acercamiento a la información que declara se enmarca solo en el hecho de que conoce el denominado “índice Ebitda”, pero el mismo expresa en estrados no saber ni tener acceso a mayor información que pudiese dar cuenta de mayor información, más allá de las cifras que indican los documentos. En su declaración el señor para expresa que es Jefe de control interno de tercer piso de París de Talca hace 16 años y sobre este aspecto señala que respecto de los resultados, él sólo maneja el tema de los gastos a nivel teórico, porque todo lo que es contabilidad los ve Cencosud en Finanzas y llegan solamente los resultados finales y esos el gerente en la reunión se los comunica. Más adelante precisa que los números llegan a nivel de toda la cadena, les informan cómo le va al Jumbo, el Holding de Cencosud pero ellos filtran a nivel de tiendas Paris para ver cómo está la compañía. Luego indica que el documento que maneja el testigo se llama informe de gasto que le llega al gerente una vez al mes y aquel se lo remite al testigo para que pueda revisarlo en el tema de los gastos y el otro documento o se acuerda el informe final que está asociado al Ebitda, que es un indicador de cómo está más o menos la compañía y como está la tienda para saber si la tienda tuvo ganancia o no la tuvo , pero es un documento que elabora Cencosud desde finanzas o presupuesto, en la tienda ellos solo manejan la información que les llega desde allá. No conoce los antecedentes que se usan para hacer el Ebitda, ni tiene acceso a esa información. Lo anterior da cuenta que el testigo declara sobre lo que conoce de un índice de medición de metas interno que le es comunicado, pero no conoce ni tiene posibilidad de conocer mayores antecedentes, de manera que, por mucho que el testigo sepa y declare sobre el “índice Ebitda”, lo que conoce es información que emana de la misma demandada. Lo anterior se reafirma cuando en el contra examen es preguntado y señala que no conoce la cifra exacta de los resultados operativos, de cuantos ingresos y egreso tuvo la tienda Talca en el 2017 versus el 2018, tampoco conoce el porcentaje.

Por último, todas estas conclusiones no se alteran con la exhibición pedida por los actores, pues se exhiben estados financieros elaborados por la misma demandada, suscritos por el gerente de la tienda de Talca.

**SEXTO.- El cambio de modalidad de compra de los clientes como causa de un decrecimiento comercial. Falta de precisión de los hechos y falta de prueba para acreditar la veracidad de este hecho (puntos de prueba 2 y 3).** Que la carta de aviso de despido, como parte del presupuesto fáctico de la causal aplicada, expresa que ese importante e insostenible decrecimiento comercial (expresado en la baja de resultados operativos) se agrava por la existencia de un cambio en la modalidad de compras de los clientes, los que prefieren materializar dichas compras a través de plataformas virtuales de comercio electrónico,



disminuyendo su concurrencia física a las tiendas lo que ha incidido en una baja importante de las mismas.

Se trata de un hecho de terceros ajenos a la relación laboral pues atribuye como parte de la causa de los bajos resultados a un cambio de conducta de los clientes, sin dar mayor precisión de como eso puede influir en la labor específica de los actores (de acuerdo a los testigos de la causa, todo se desempeñaban en la sección de calzado) ni expresa la carta como incide la baja de concurrencia física en los resultados operacionales.

La única prueba que rinde la demandada son los dichos del mismo testigo señor Parada que no conoce con mayor precisión datos concretos sobre este aspecto, pero, además, es contradictorio con la misma carta de despido pues, por una parte, señala que más que un cambio de conducta de los clientes, lo que hay es una decisión de la empresa de cambiar el modelo de atención a los clientes, y por otra parte, expresamente indicó que la causa del despido no es la baja de resultados operativos sino que precisamente la necesidad de reducir costos y este cambio de modelo de atención decidido por la empresa, decisión que es totalmente extemporánea al despido (señala que el hecho viene desde el año 2014).

En estrados el testigo señor Para señaló que hubo una restructuración en el modelo de atención de servicio, tema que viene hace tiempo, años, desde el 2014 o 2015, los vendedores en vez de despedirlos pasaron todos a cajeros, quedaron algunos (los actores) de calzados varón y ellos fueron unos de los pocos vendedores, pero llegó el momento en que hubo que reducir costos, porque la tienda y en general Cencosud no ha tenido buenos resultados ya desde el año 2016 y con los resultados que tuvieron en el 2017 y 2018 la empresa optó por cambiar el modelo de atención de lo que es calzado varón y ello a nivel nacional y no solamente la tienda y, por lo tanto, se tuvo que poner fin al contrato de los actores porque, con lo que ellos ganaban, se pueden contratar tres asistentes de calzado varón por un vendedor, pues el vendedor tenían un sueldo alto y por esa razón la compañía optó por eliminar el cargo de vendedor integral en calzado varón y solo hay asistentes de venta. Tiene claro que por esa razón salieron ellos. Mas adelante y luego de describir las funciones del vendedor integral señala que ellos tenían una comisión, tenían un sueldo base y comisiones por las ventas que ellos hacían. El asistente de ventas atiende al cliente pero es éste quien pasa la venta en una caja y ellos tiene un sueldo fijo. Contra examinado sobre este aspecto, precisa que la contratación de cajeros por vendedores fue en el año 2014 y 2015 más o menos. En la actualidad funcionan con cajeros y algunos departamentos funcionan con vendedores integrales porque son de especialidad. En el departamento de zapatería es efectivo que contrataron asistentes de ventas, tres personas. Es efectivo que la idea era reducir costos y también actualizarse al nuevo servicio al cliente. Es efectivo que esta fue una decisión a nivel nacional para competir con las otras compañías. Desconoce si eso se hizo a nivel de todo el retail. No conoce la cifra exacta de los resultados operativos, de cuantos ingresos y egreso tuvo la tienda Talca en el 2017 versus el 2018, tampoco conoce el porcentaje, no sabe lo que ocurre en la sección de calzado pues se ve la tienda como un todo, no maneja la información de si se cumplieron las metas en el área de calzado y preguntado acerca de cómo la tienda Talca verifica la



cantidad de ventas on line, señala que todo eso es centralizado y por eso no lo conoce. En diciembre del año pasado eran la misma cantidad de cajeros, no se han despedido más.

**SÉPTIMO.- Existencia de una reestructuración operacional, disminución de personal de venta directa (cajeros de los centros de caja en particular) como necesidad para mantener la viabilidad de la empresa y la fuente laboral de los demás trabajadores. Análisis de la prueba (puntos de prueba 2 y 3).** Que sin perjuicio de las conclusiones de los dos motivos anteriores y en un intento de clarificar la descripción fáctica de la carta de despido en esta parte, este sentenciador entiende que la demandada funda el despido, además, en la existencia de una reestructuración operacional manifestada en una disminución de su personal relacionado con venta directa al público y en la modificación de su modelo de atención y servicio a los clientes, y ello para mantener la viabilidad de la empresa y la preservación de la fuente laboral del resto de los trabajadores.

Debiendo ser coherente con lo señalado anteriormente, lo cierto es que no se ha acreditado las circunstancias anteriores por las razones ya expuestas en relación a la efectividad de los resultados operativos y al cambio en el modelo de atención. Por el contrario la carta es contradictoria en si misma, pues invoca, como causa, un cambio en la forma en que los clientes compran y luego invoca un cambio en el modelo de atención decidido por la demandada.

Para acreditar la disminución de dotación incorpora un listado de trabajadores despedidos, solo en la venta de calzado deportivo, documento elaborado por la misma demandada y solo acredita el despido con la respectiva carta respecto de dos trabajadores, lo que da cuenta de una disminución de personal que no se condice con la entidad que refiere la carta de despido. Respecto del cambio del modelo de atención de clientes, además, de lo ya referido, solo cabe reiterar que el testigo señor Parada señaló que este cambio viene desde el año 2014, lo que tampoco se condice con la relevancia que le da la comunicación de despido. Por último, ninguna prueba aparece en el proceso que pudiese llevar al tribunal a concluir que el despido de los actores y este proceso de reestructuración es necesario para la viabilidad de la empresa y para mantener el trabajo de los demás dependientes de la tienda de Talca. Por el contrario, el testigo señor Parada señaló en el contra examen que desconoce cuántas tiendas nuevas abrió Paris el año pasado, pues esa información nunca le llega, tampoco le llega información de cuando cierran tiendas. Precisa que la contratación de cajeros por vendedores fue en el año 2014 y 2015 más o menos. Y Expresamente señala que en el departamento de zapatería es efectivo que contrataron asistentes de ventas, tres personas. Desconoce cuanta gente a ingresado a la tienda Paris Talca desde enero a octubre de 2017 y de enero a octubre de 2018. No conoce la cifra exacta de los resultados operativos, de cuantos ingresos y egreso tuvo la tienda Talca en el 2017 versus el 2018, tampoco conoce el porcentaje, no sabe lo que ocurre en la sección de calzado pues se ve la tienda como un todo, no maneja la información de si se cumplieron las metas en el área de calzado. En diciembre del año pasado eran la misma cantidad de cajeros, no se han despedido.



**OCTAVO.- Análisis del resto de la prueba en relación a los hechos de la carta de despido.** Que todas las conclusiones anteriores no se alteran con el análisis del resto de la prueba rendida por ambas partes. En especial por lo declarado por las trabajadoras que comparecen como testigos de los actores desde que ambas son concordantes en señalar que, por lo que ellas pueden saber, las metas asignadas a los demandantes tanto grupales como individuales, se cumplían y si bien conocen de la existencia de despidos, explica que se ha contratado mas gente y afirman no conocer la situación económica o financiera de la empresa como aportar más información certera al respecto.

Respecto de la falta de comparecencia de dos de los actores, estima el tribunal improcedente aplicar el apercibimiento referido en el artículo 454 N° 3, pues la carga de la prueba en estos juicios por despido reside en la demandada, porque respecto de las demás acciones hay prueba instrumental que da certeza respecto de los hechos a probar y porque, además, la norma consagra para el juez una facultad al respecto.

**NOVENO. En cuanto a las estipulaciones de los contratos de trabajo de los actores (punto de prueba N° 1).** Que no obstante haberse recibido a prueba por el tribunal, lo cierto es que este aspecto factico es irrelevante para la decisión del asunto discutido en juicio pues no hubo controversia, salvo respecto de la suma de dinero por concepto de ultima remuneración mensual, respecto de la existencia del contrato y sus estipulaciones.

**DÉCIMO. Respecto del contenido del Finiquito (punto de prueba N° 4).** Que en relación con la pretensión de aplicación de multas a la demandada por no poner a disposición el finiquito y pago de indemnizaciones en tiempo y forma, la prueba instrumental incorporada por las partes permite concluir que los tres demandantes fueron despedidos el 17 de diciembre de 2018, mismo tiempo en el que se produce la separación de ellos.

Consta de los respectivos finiquitos que la firma y ratificación de los mismos se produce por los actores el 8 de enero de 2019 y consta de los comprobantes de entrega de vale vista que ellos fueron emitidos el 26 de diciembre de 2018 respecto de Enrique Silva y doña Roxana Gómez y el 11 de diciembre de 2018 respecto de doña Jessica Acuña. Por su parte y respecto de la demandante doña Jessica Acuña el proyecto de finiquito fue presentado a Notaria el 13 de diciembre de 2018, sin que consta en el proceso que, respecto de los otros dos demandantes, el proyecto de finiquito haya sido puesto a disposición dentro de los 10 días hábiles contados desde la separación.

**UNDÉCIMO. Ultima remuneracion mensual de los actores y monto descontado por concepto de aporte del empleador a la cuenta de cesantia de los demandantes (puntos de prueba N° 5 y 6).** Que todos los demandantes piden que se declare como ultima remuneración mensual una suma de dinero que es diferente a la indicada en los respectivos finiquitos.

Que conforme a los contratos de trabajo y las liquidaciones de remuneraciones incorporadas por la demandada, se puede establecer que los actores percibían remuneraciones variables de aquellas a que se refiere el



artículo 71 en relación con el artículo 172 y 42 del Código del Trabajo, de manera que la última remuneración mensual para cada uno de ellos debe corresponder al promedio percibido por el trabajador en los últimos tres meses calendario, en el caso de autos, los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2018, sin considerar, en cada caso, las sumas por concepto de horas extraordinarias y de aguinaldo de fiestas patrias por ser estipendios expresamente excluidos del concepto de última remuneración mensual

De esta forma la última remuneración mensual de la actora doña Jessica Acuña era de \$ 799.335, de doña Roxana Gómez era de \$ 847.132 y del señor Silva Castro era de \$ 771.222.

**DUODÉCIMO. En relación a la acción para calificar el despido como improcedente.** Que conforme se ha señalado en los Motivos cuarto a noveno, la demandada no ha dado cuenta de la carga procesal que le impone el artículo 454 N° 1 inciso 2 del Código del Trabajo, motivo por el cual resulta innecesario un análisis del encuadre de hechos no acreditados con la causal jurídica de terminación del contrato, lo que determina, en consecuencia que el despido de los demandantes por la causal de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio es improcedente y, conforme lo dispone el artículo 168 inciso primero del referido cuerpo legal debe así declararlo el tribunal y condenar a la demandada al pago del recargo del 30% de la indemnización por años de servicio conforme lo establece el literal a) del citado artículo, sobre la base del tiempo de prestación de los servicios y la base de cálculo determinada.

**DÉCIMO TERCERO. La improcedencia del descuento del artículo 13 de la ley N° 19.729.** Que no resulta posible sustraerse a la controversia que se ha planteado en doctrina y en la jurisprudencia en relación al afecto jurídico que tiene la declaración de improcedencia del despido por necesidades de la empresa, en la imputación que autoriza dicha norma legal, frente a la que el tribunal ha resuelto reiteradamente que dicha calificación debe necesariamente afectar el ejercicio de aquel derecho por parte del empleador.

Que no obstante la redacción del punto de prueba y no estando en discusión el hecho del monto respectivo del aporte, lo cierto es que la procedencia de la devolución por el seguro de cesantía es una cuestión de carácter jurídico a resolver.

Que si bien el artículo 13 de la ley N° 19.728 faculta al empleador para imputar a la indemnización por años de servicio, las cotizaciones efectuadas por el empleador como aporte a la cuenta individual por cesantía del trabajador mas su rentabilidad y menos los costos de administración, cuando el trabajador sea despedido por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, la declaración que se hace en este fallo en orden a que la causal aplicada es improcedente, determina que no hay legitimidad en el descuento que se hace en el finiquito de dicho aporte, pues priva de base la aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la ley ya citadas y, además, lo accesorio sigue la suerte de lo principal de forma que mal podría validarse la imputación a la indemnización si el despido que justifica ese efecto ha sido declarado contrario a derecho.





De la regla ya indicada aparece que una condición sine qua non para que opere la imputación que se autoriza, es que el contrato haya terminado por la causal de necesidades de la empresa y, siendo declarada como improcedente la causal en este caso, cabe entender que no se satisface dicha condición. Por otra parte, es irrelevante que al declararse la improcedencia de la causal de necesidades de la empresa, se produzca lo que en concepto de la demandada es un despido sin causal, pues la misma ley laboral se pone en el caso que existan despido sin invocar causal legal, como aparece del mismo artículo 168 inciso 1 del Código del trabajo.

De esta forma, la deducción que se hizo de la suma por concepto del aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía de los actores, ello no resulta procedente en este caso y debe ser restituida como parte de dicha indemnización por años de servicio.

**DÉCIMO CUARTO. La base de cálculo y el monto de la indemnización por años de servicio.** Que la demandante doña Jessica Acuña pide se declare que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio es de \$ 814.176 pesos o la que estime el tribunal y se condene a la demandada al pago de \$ 1.465.517 por concepto de incremento legal establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo y al pago de \$ 866.223 por concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 845.371 más la diferencia de cálculo de \$20.852 pesos, o lo que el tribunal estime conforme a derecho.

Según los antecedentes reseñados su última remuneración mensual era de \$ 799.335 y teniendo presente sus 6 años de prestación de servicios, le correspondía una indemnización del artículo 163 inciso 2 del Código del Trabajo de \$ 4.796.010, y habiéndosele pagado más de aquella suma conforme consta del finiquito incorporado por ambas partes, nada se le adeuda por este concepto.

Por su parte, doña Roxana Gómez, pide se declare que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio es de \$ 811.910 o la que estime el tribunal, pero no pide que se condene al pago de diferencia alguna en este aspecto y solo pretende que se condene a la demandada al pago de \$1.145.512 por concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 1.145.512. Conforme consta de los antecedentes ya reseñados su última remuneración mensual era de \$ 847.132.

Por último, el señor Silva Castro, pretende se declare que su remuneración promedio para el cálculo de la indemnización por años de servicio era de \$ 772.973 o la que estime el tribunal y se condene a la demandada al pago de \$1.347.396 por concepto de indemnización por años de servicio compuesta de descuento por AFC de \$ 1.145.512 más la diferencia de cálculo conforme la base de cálculo de dicha indemnización por años de servicios de \$ 56.595.

Acorde con el análisis que se hizo más arriba, la última remuneración de este demandante era de \$ 771.222 de forma que atendido el tiempo de prestación de servicios para fines indemnizatorios le correspondía una indemnización por años de servicio de \$8.483.442, pagándosele en este aspecto y según consta en el finiquito, la suma de \$ 8.446.108, por lo que se le adeuda la suma de \$ 37.334.



En relación a la pretensión de pago de las sumas descontadas a los actores por concepto de aporte del empleador a la cuenta individual de cesantía de ellos y según se dijo en el motivo anterior, deberá pagársele a la demandante señor Jessica Acuña, la suma de \$ 845.371, a la señora Roxana Gómez la suma de \$ 1.145.512 y al señor Silva Castro, la suma de \$ 1.290.801.

En cuanto al porcentaje de recargo por aplicación improcedente de la causal de despido, éste debe determinarse conforme a la última remuneración mensual de cada demandante y teniendo presente el tiempo de prestación de servicios. Así respecto de la señora Jessica Acuña el recargo será de \$1.438.803, respecto de la señora Roxana Gómez será de \$ 2.541.396 y respecto del señor Silva castro será de \$ 2.545.032.

**DÉCIMO QUINTO. En cuanto a la acción para condenar a la demandada a multas.** Que el artículo 177 del Código del Trabajo en su inciso 1° establece que el finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de diez días hábiles, contados desde la separación del Trabajador.

Según ya se dijo en Motivo Décimo, sólo respecto de la demandante doña Jessica Acuña el proyecto de finiquito fue presentado a Notaria el 13 de diciembre de 2018 (con timbre del Notario Público), sin que consta en el proceso que, respecto de los otros dos demandantes, el proyecto de finiquito haya sido puesto a disposición dentro de los 10 días hábiles contados desde la separación pues la fecha que esta puesta en los otros dos proyectos de finiquitos señala "03/01" y no consta timbre del Notario, motivo por el cual la demandada infringió la normativa laboral y, conforme al artículo 506 del Código del Trabajo, que establece el régimen sancionatorio general, debe sancionarse a la demandada al pago de una multa única de 5 UTM a beneficio fiscal.

**DÉCIMO SEXTO. Respecto de la acción de la señora Acuña para el pago de remuneración adeudada.** Que respecto de esta pretensión, la demandada opuso excepción de pago, a cuyo respecto la defensa de la actora, en la audiencia de preparación, se allanó a ella, razón por la que debe ser acogida dicha excepción y será rechazada esta pretensión.

Por estas consideraciones, normas legales ya citadas y lo dispuesto en los artículos 415, 420, 425, 446, 452, 453, 456, 459, 485, 489 493 y 495 del Código del Trabajo, se resuelve:

I.- Que **se acoge la acción de calificación del despido** deducida por doña **Jessica Natalia Acuña Jerez** en contra de **Paris Administradora Limitada**, ambos ya individualizados declarándose, en consecuencia, **que el despido de la demandante es improcedente.**

II.- Que la remuneración promedio de doña **Jessica Natalia Acuña Jerez** en carácter ultima remuneración mensual para el cálculo de la indemnización por años de servicios era de \$ 799.335.



III. Que la demandada ya individualizada, deberá pagar a doña **Jessica Natalia Acuña Jerez** las siguientes sumas de dinero.

a) la suma de \$1.438.803 por concepto de recargo legal de un 30% por aplicación improcedente de causal de despido.

b) la suma de \$ 845.371 por concepto de descuento indebido de la indemnización por años de servicio.

IV.- Que se **rechaza la acción para el cobro de diferencias** por concepto de diferencia no pagada de indemnización por años de servicio deducida por doña **Jessica Natalia Acuña Jerez**.

V.- Se **acoge la excepción de pago** y en consecuencia **se rechaza la acción de cobro de remuneraciones** no pagadas, ambas deducidas por doña **Jessica Natalia Acuña Jerez**.

VI.- Que **se acoge la acción de calificación del despido** deducida por doña **Roxana del Pilar Gómez Erickson** en contra de **Paris Administradora Limitada**, ambos ya individualizados declarándose, en consecuencia, **que el despido de la demandante es improcedente**.

VII.- Que la remuneración promedio de doña **Roxana del Pilar Gómez Erickson** en carácter ultima remuneración mensual para el cálculo de la indemnización por años de servicios era de \$ 847.132.

VIII.- Que la demandada ya individualizada, deberá pagar a doña **Roxana del Pilar Gómez Erickson** las siguientes sumas de dinero.

a) la suma de \$2.541.396 por concepto de recargo legal de un 30% por aplicación improcedente de causal de despido.

b) la suma de \$1.145.512 por concepto de descuento indebido de la indemnización por años de servicio.

IX.- Que **se acoge la acción de calificación del despido** deducida por don **Enrique Alberto Silva Castro** en contra de **Paris Administradora Limitada**, ambos ya individualizados declarándose, en consecuencia, **que el despido del demandante es improcedente**.

X.- Que la remuneración promedio de don **Enrique Alberto Silva Castro** en carácter ultima remuneración mensual para el cálculo de la indemnización por años de servicios era de \$ 771.222.

XI. Que la demandada ya individualizada, deberá pagar a don **Enrique Alberto Silva Castro** las siguientes sumas de dinero.

a) la suma de \$ 2.545.032 por concepto de recargo legal de un 30% por aplicación improcedente de causal de despido.

b) la suma de \$ 37.334 por concepto de diferencia no pagada de la indemnización por años de servicio.



c) la suma de \$ 1.290.801 por concepto de descuento indebido de la indemnización por años de servicio.

XII.- Que la demandada ya individualizada incurrió en infracción a lo dispuesto en el artículo 177 inciso 1 del Código del Trabajo, por lo que se le condena al pago de una multa de 5 UT; a beneficio fiscal.

XIII. Que las prestaciones e indemnizaciones referidas precedentemente deberán ser pagadas reajustadas y con los intereses legales del artículo 173 del Código del Trabajo.

XIV.- Que respecto de la demanda deducida por la señora Acuña, no se condena a la demandada al pago de las costas de la causa por no haber sido completamente vencida. Respecto de la demanda deducida por la señora Gómez y el señor Silva, se condena a la demandada al pago de las costas de la causa, regulándose las personas en la suma de \$ 300.000 por cada uno de ellos.

Las partes quedarán válidamente notificadas de la presente sentencia en la actuación del día de hoy 9 de octubre de 2019, y por lo tanto, desde esta notificación comienza a correr el plazo legal para impugnarla.

Manténganse en custodia la prueba documental incorporada por las partes por un plazo de tres meses contados desde la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, a cuyo término, procederán a su retiro bajo apercibimiento de destrucción.

**RIT O-64-2019 acumulada con las causa O-94-2019 y O-95-2019**  
**RUC N° 19-4-0165757-9**

Dictada por don **Jaime Álvaro Cruces Neira**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca



XSDTMXLPRH

A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>